



AMPARO EN REVISIÓN NÚMERO 2528/97.
QUEJOSO: BENJAMÍN FRANCISCO
VILLAESCUSA MOLINA.

PONENTE: MINISTRO JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIO: ARMANDO CORTÉS GALVÁN.

Vo. Bo.
MINISTRO:

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al
dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve.

COPIADO:

VISTO, para resolver, el toca número 2528/97, relativo
al recurso de revisión interpuesto por Benjamín Francisco
Villaescusa Molina, en el juicio de amparo número 896/96, del
índice del Juzgado de Distrito en el Estado de Sonora, con
residencia en la ciudad de Hermosillo, y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el dieciocho de diciembre
de mil novecientos noventa y seis, ante la Oficialía de Partes
Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora,
Benjamín Francisco Villaescusa Molina, por su propio derecho,
solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de
las autoridades y por los actos que a continuación se precisan:

"AUTORIDADES RESPONSABLES:

**A) EL C. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.**

- B) CONGRESO DE LA UNIÓN.
- C) EL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
- D) EL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN.
- E) EL JUEZ CUARTO DEL RAMO CIVIL COMISIONADO EN MATERIA MERCANTIL, DE HERMOSILLO, SONORA.
- F) LOS ACTUARIOS EJECUTORES PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO ADSCRITOS AL JUZGADO CUARTO DEL RAMO CIVIL, DE HERMOSILLO, SONORA.
- G) EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA JUDICIAL DEL ESTADO, CON RESIDENCIA EN HERMOSILLO, SONORA.
- H) EL JEFE DE LA POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, ZONA CENTRO, COMANDANTES DE UNIDAD DE LA POLICÍA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, ZONA NORTE Y ZONA SUR, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD.
- I) EL ENCARGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD.

Las autoridades responsables mencionadas en los incisos A) al E) en su carácter de ordenadoras, y las restantes de ejecutoras de los actos reclamados.

ACTOS RECLAMADOS. Los actos reclamados son los siguientes:

- A) Del Congreso de la Unión, la aprobación, sanción y expedición del artículo 33 de la Ley



General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, publicada en el Diario Oficial el 14 de enero de 1985.

B) Del Presidente de la República, la aprobación expedición, promulgación y publicación del artículo antes mencionado de la ley citada en el inciso anterior.

C) Del Secretario de Gobernación y del C. Secretario de Hacienda y Crédito Público, se reclama el refrendo y firma del Decreto del artículo 33 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito.



CORTE DE
DEPARTAMENTO
DE ACUERDO

D) Del C. Juez Cuarto del Ramo Civil comisionado en materia mercantil, de Hermosillo, Sonora, reclamo la aplicación del artículo 33 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito; el acuerdo y todas sus consecuencias incluyendo la orden de desposesión de los bienes arrendados a que hace referencia en el punto uno de antecedentes, dictado con fecha 29 de octubre de 1996 en el expediente No. 2557/96 relativo al juicio ejecutivo mercantil planteado por ÁLVARO J. VILLAGRÁN GARCÍA en su carácter de apoderado legal de ARRENDADORA FINANCIERA MARGEN, S.A. DE C.V., en contra del quejoso, a través del cual ordena se me requiera por la entrega de los bienes que se describen en el punto uno de antecedentes, a cuyo texto remito, así como el cumplimiento de dicho acuerdo.

De todas las autoridades responsables incluyendo las ejecutoras, se reclama la aplicación en mi perjuicio del artículo 33 de la Ley General de Organizaciones y Actividades de Crédito y todas sus consecuencias, incluyendo la ejecución de los actos dictados por los jueces responsables y la desposesión que pretenden efectuar en nuestro perjuicio de los bienes cuyo uso y disfrute ostentamos."

SEGUNDO. El quejoso narró como antecedentes de los actos reclamados, los siguientes:

"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los hechos y abstenciones que me constan y que constituyen antecedentes de los actos reclamados y fundamento de los conceptos de violación, son los siguientes:

1. Con fecha 16 de marzo de 1993, Constructora de Baviacora, S.A. de C.V. por conducto de sus representantes legales y ARRENDADORA FINANCIERA MARGEN, S.A. DE C.V., ORGANIZACIÓN AUXILIAR DE CRÉDITO, celebraron dos contratos de arrendamiento financiero, bajo los números [REDACTED] y [REDACTED] siendo los bienes dados en arrendamiento los siguientes:

*A) Automóvil [REDACTED]
[REDACTED] modelo [REDACTED] motor hecho en México,*



No. [REDACTED]

B) Retroexcavadora nueva marca [REDACTED] Modelo [REDACTED]

[REDACTED] serie [REDACTED] fase [REDACTED]

[REDACTED] con
convertidor de par cargador Retroexcavadora
Integral.

Anexándose al presente escrito, copia certificada
ante Notario Público No. 58, Lic. Cesar Tapia
Quijada, con residencia y ejercicio en esta ciudad
de Hermosillo, Sonora de fecha 17 de diciembre de
1996, de las facturas números 0530 y 168 de los
bienes descritos con anterioridad, expedidas la
primera el día 29 de noviembre de 1992, por
González R. Automotriz, S.A. de C.V.; la segunda
por Maquinaria Industrial y Agrícola Kino, S.A. de
C.V., mismas que obran en el expediente No.
2557/96 tramitado en el Juzgado Cuarto del Ramo
Civil Comisionado en Materia Mercantil de esta
ciudad.

2. El día 20 de julio de 1994, Constructora de
Baviacora, S.A. de C.V., en su carácter de cedente y
el suscrito BENJAMÍN FRANCISCO VILLAESCUSA
MOLINA, en su carácter de cesionario, celebramos
contrato de cesión de derechos y obligaciones de
los contratos mercantiles de arrendamiento
financiero números [REDACTED] y [REDACTED]

3. Con fecha 26 de noviembre de 1996, el suscrito
BENJAMÍN FRANCISCO VILLAESCUSA MOLINA, fui
emplazado de la demanda interpuesta por

ARRENDADORA FINANCIERA MARGEN, S.A. DE C.V., donde se me requirió por la entrega de los bienes dados en arrendamiento ya referidos en el punto No. 1 anterior. Se anexa copia del requerimiento realizado al suscrito BENJAMÍN FRANCISCO VILLAESCUSA MOLINA, el día 26 de noviembre de 1996, por el C. Actuario Quinto Ejecutor adscrito al Juzgado Cuarto Comisionado en Materia Mercantil de esta ciudad de Hermosillo, Sonora. Así como copia del auto de radicación de fecha 26 de noviembre de 1996, del expediente No. 2557/96 tramitado ante el Juzgado Cuarto del Ramo Civil de esta ciudad."

TERCERO. A su vez, el quejoso señaló como violados en su perjuicio los artículos 14, 124 y 133, de la Constitución General de la República y formuló los siguientes conceptos de violación:

"1. La aprobación, expedición, promulgación y aplicación en perjuicio del quejoso del artículo 33 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, contraviene lo dispuesto en el artículo 14 constitucional y por lo mismo debe declarar la inconstitucionalidad del mismo.

En el segundo párrafo del artículo 14 constitucional se establece que nadie puede ser privado de sus derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del



procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

El artículo 2398 del Código Civil para el Distrito Federal establece que hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa, y la otra a pagar por ese uso o goce un precio cierto; en el artículo 2412 del mismo Código, se establecen las obligaciones del arrendador, tratándose fundamentalmente la obligación de conceder el uso o goce temporal.



C. DE
A. N. L. O. M.
DE A. C. U. A. R. A. S.

En el caso, el artículo 33 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, establece que en caso de incumplimiento del arrendatario de las obligaciones consignadas en el contrato respectivo, la arrendadora podrá pedir judicialmente la posesión de los bienes objeto del arrendamiento, y el juez decretará de plano la posesión, cuando le sea pedida en la demanda o durante el juicio.

La facultad que en términos apuntados se otorga al juez, viola la garantía de audiencia, por lo tanto, al dictarse sentencia, debe declararse la inconstitucionalidad de tal precepto.

En efecto, el contrato de arrendamiento genera a favor del arrendatario el derecho para disfrutar del bien objeto del mismo; luego entonces, cuando sin que medie juicio y sin que al arrendatario se le dé oportunidad de ser oído en defensa de sus intereses, se le priva de sus derechos sin que haya

sentencia alguna en la que se declare la recesión del contrato de arrendamiento y restitución del bien objeto del mismo, es incuestionable que al arrendatario se le está privando de sus derechos sin que haya seguido juicio en su contra y cumplimiento con las formalidades esenciales del procedimiento, por lo que el artículo 33 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, debe declararse inconstitucional.

Conforme al texto de tal disposición, basta con que el arrendador exhiba los documentos que en el mismo precepto se precisan para que el juez ordene la desposesión del bien sin que previamente se le hubiese dado la oportunidad al arrendatario de ser oído, y vencido, pues aún antes de que conteste la demanda y quede acreditado el supuesto incumplimiento que alega el actor, sin que el demandado hubiese ofrecido y desahogado sus pruebas para demostrar lo contrario de lo sostenido por el demandante, se le está privando del uso y disfrute temporal que le corresponde, de acuerdo con lo pactado en el contrato de arrendamiento.

No es obstáculo para lo anterior, el hecho de que se trate de un arrendamiento financiero con ciertas características especiales del carácter del arrendador y de la forma en que se adquiere el bien material del contrato, porque en esencia se trata de un arrendamiento liso y llano, tal y como se regula





en los Códigos Civiles del Distrito Federal y de toda la República, puesto que el propietario del bien arrendado sigue teniendo el carácter de arrendador frente al usuario o usufructuario del mismo, quien a cambio de tal uso se obliga a pagar una compensación o rentas por el uso temporal que se le transmite, consecuentemente no hay duda de que se trata de un contrato que de acuerdo con su naturaleza comparte las características del arrendamiento civil, y por lo arrendatario de sus derechos, afectados sus intereses jurídicos y patrimoniales dado que se le priva del uso y disfrute del bien, sin otorgarle la garantía de audiencia.

CORTE DE
NACION,
DE ACUERDO

Por lo anterior, cuando las autoridades judiciales y demás ejecutorias aplican en perjuicio de los quejosos el artículo 33 impugnado, violan en su perjuicio la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 constitucional, así como el artículo 133 de la misma Constitución, que establece para los jueces la obligación de ajustarse en todo y por todo, a lo establecido en dicha Norma Fundamental.

Por todo lo expuesto, es inconstitucional la orden para que se nos desposea de los bienes objeto del arrendamiento que se describen en los antecedentes, por lo que en su oportunidad deberá concederse el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita, y ordenar que quede sin efecto dicha orden.

2. *Independientemente de lo anterior, la aprobación, expedición, prorrogación, publicación y consecuente aplicación en perjuicio de los quejosos, del artículo 33 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, también viola los artículos 124 y 133 de la Constitución General de la República, por lo que en su oportunidad deberá decretarse su inconstitucionalidad y conceder al suscrito el amparo y protección de la Justicia Federal.*

En efecto, en el artículo 124 de la Constitución General de la República, se establece que "las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados."



SUPREMA
JUSTICIA DE
SECRETARIA QUE

Luego entonces, si no hay ninguna disposición que faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de arrendamientos, es incuestionable que tal facultad le corresponde a los Estados, por lo tanto, cuando la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, expedida por el Congreso de la Unión, reglamenta el contrato de arrendamiento financiero, contraviene el Pacto Federal, porque la esfera de competencia de los Estados, ya que solamente éstos pueden dictar leyes de acuerdo con su propia Constitución Local que reglamente el contrato de arrendamiento.

Al respecto, me remito a los argumentos vertidos en el concepto de violación anterior, en relación a que a pesar de que la Ley General de



Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito al contrato que nos ocupa, le da la denominación de arrendamiento financiero, no deja de ser un contrato de carácter civil cuya reglamentación compete a las entidades de la federación.

Por lo anterior, el precepto en cuestión viola el artículo 133 en cuanto a que se trata de una Ley del Congreso de la Unión que la contraviene por lo que los jueces señalados como responsables y demás autoridades responsables señaladas, como ejecutoras, indebidamente lo aplican en el presente caso en perjuicio del quejoso, por lo que resulta procedente el amparo."



CORTE DE LA FEDERACION.

RAI DE MEXICO

CUARTO. La demanda de garantías fue remitida por razón de turno al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en la ciudad de Hermosillo, cuyo titular admitió la demanda, registrándola en el expediente número 896/96; y previos los trámites legales correspondientes, en la audiencia constitucional celebrada el diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y siete, dictó la sentencia respectiva, que terminó de engrosar hasta el nueve de abril de mil novecientos noventa y siete, la que culminó con los siguientes puntos resolutivos:

"PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por BENJAMÍN FRANCISCO VILLAESCUSA MOLINA, respecto de la autoridad precisada en el considerando primero de esta resolución.

SEGUNDO. *La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a BENJAMÍN FRANCISCO VILLAESCUSA MOLINA, en contra de los actos de las autoridades precisadas en el considerando segundo del presente fallo."*

QUINTO. Inconforme con la sentencia de mérito, el quejoso interpuso en su contra recurso de revisión.

Por acuerdo del veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y siete, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia admitió el recurso de revisión y ordenó dar al Procurador General de la República la intervención que legalmente le corresponde.

El Agente del Ministerio Público Federal adscrito formuló el pedimento IV-303/97, en el sentido de que se modificara la sentencia recurrida y se decrete el sobreseimiento en el juicio de garantías por lo que a todos los actos reclamados se refiere, ante la falta de expresión de conceptos de violación.

Por auto de Presidencia del diez de noviembre de mil novecientos noventa y siete, el asunto fue turnado para su estudio al señor Ministro Juan Díaz Romero.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer del presente recurso de revisión, conforme a lo dispuesto por los artículos 107,



fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Cuarto Transitorio del Decreto de reformas a ésta, del diez de junio de mil novecientos noventa y nueve; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; y 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en el Séptimo Considerando y el artículo Segundo Transitorio del Acuerdo General Plenario 6/1999, publicado el veintitrés de junio de mil novecientos noventa y nueve en el Diario Oficial de la Federación; en virtud de que se interpuso con anterioridad a la vigencia de este Acuerdo en contra de una sentencia que fue dictada por una Juez de Distrito, en la audiencia constitucional de un juicio de garantías en el que se reclamó la inconstitucionalidad de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, específicamente su artículo 33, expedida por el Congreso de la Unión, en un aspecto en el que no existe jurisprudencia de este Tribunal Pleno.

SEGUNDO. La parte considerativa de la sentencia recurrida es del tenor siguiente:

"PRIMERO. Los CC. DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA JUDICIAL DEL ESTADO, JEFE DE LA POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Y COMANDANTE DE UNIDAD DE LA POLICÍA Y TRÁNSITO MUNICIPAL ZONA NORTE, rindieron su informe justificado correspondiente negando la existencia del acto reclamado. Sin prueba en contrario que desvirtúe su negativa, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, por lo

que a dichas autoridades se refiere, por carecer de materia sobre la cual pudiera recaer. Apoya lo anterior la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, y la tesis jurisprudencial número 1002, publicada en la página 1621, de la Segunda Parte del Último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, consultable bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES."

SEGUNDO. Son ciertos los actos reclamados del C. JUEZ CUARTO DEL RAMO CIVIL COMISIONADO A LA MATERIA MERCANTIL con residencia en esta ciudad, pues así lo manifiesta en su informe respectivo.

Los CC. ACTUARIOS, PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO EJECUTORES ADSCRITOS AL JUZGADO CUARTO DEL RAMO CIVIL COMISIONADO A LA MATERIA MERCANTIL, así como los CC. COMANDANTE DE UNIDAD DE LA POLICÍA Y TRÁNSITO MUNICIPAL ZONA SUR Y ENCARGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, todos con residencia en esta ciudad omitieron rendir su informe justificado correspondiente no obstante estar debidamente notificado para ello, por lo que con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Amparo el acto que de dicha autoridad se reclama se presume cierto, presunción que se ve corroborada con la aceptación del acto reclamado por parte de la autoridad judicial responsable



Suprema
Corte de Justicia de la Federación
Secretaría General



ordenadora y con las constancias certificadas del juicio natural de donde deriva el supuesto primer acto de aplicación del artículo 33 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, publicada en el Diario Oficial el 14 de enero de 1985, que se tilda de inconstitucional que la ordenadora acompañó a su informe.

Igualmente son ciertos los actos reclamados del H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, únicamente en lo concerniente a la creación, aprobación, expedición, promulgación y refrendo del Decreto promulgatorio de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1985, cuyo artículo 33, impugna de inconstitucional la quejosa. De las autoridades señaladas como responsables se reclama:



Del C. JUEZ CUARTO DEL RAMO CIVIL COMISIONADO A LA MATERIA MERCANTIL EN ESTA CIUDAD, la aplicación del artículo 33 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito (acuerdo de fecha 29-octubre-1996) y todas sus consecuencias, incluyendo la orden de desposesión de los bienes arrendados a que alude el quejoso en el punto uno de antecedentes de su demanda de amparo, a través del cual ordena se requiera al peticionario de

amparo por la entrega de los bienes que se describen en el punto 1 de antecedentes de su demanda de amparo, así como el cumplimiento de dicho acuerdo; ello, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 2557/96 promovido por ÁLVARO J. VILLAGRÁN GARCÍA, en su carácter de apoderado legal de ARRENDADORA FINANCIERA MARGEN, S.A. DE C.V., en contra del hoy quejoso BENJAMÍN FRANCISCO VILLAESCUSA MOLINA, a través del cual ordena se me requiera por la entrega de los bienes que se describen en el punto 1 de antecedentes, a cuyo texto remito, así como el cumplimiento de dicho acuerdo.

De los ACTUARIOS ADSCRITOS AL JUZGADO RESPONSABLE la aplicación en su contra del artículo 33 de la Ley General de Organizaciones y Actividades de Crédito, y todas sus consecuencias, incluyendo la ejecución de los actos dictados por el juez responsable, consistente en la desposesión que pretende efectuar en su perjuicio de los bienes cuyo uso y disfrute ostenta.

Del H. CONGRESO DE LA UNIÓN, la aprobación, sanción y expedición del artículo 33 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, publicada en el Diario Oficial el 14 de enero de 1985.

Del C. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, la aprobación, expedición, promulgación y publicación del artículo 33 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de



SUPREMA
JUSTICIA DE
SECRETARÍA GENERAL



Crédito, publicada en el Diario Oficial el 14 de enero de 1985.

Del C. SECRETARIO DE GOBERNACIÓN Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, el refrendo y firma del decreto del artículo 33 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito.

Actos de los que aduce resultan violatorios en su perjuicio de los artículos 14, 124 y 133.

TERCERO. Por cuestión de método se analizará el concepto de violación que se vierte en el sentido de que el Congreso de la Unión no es competente para legislar en el caso que nos ocupa, porque aun cuando la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, denomina al contrato celebrado entre las partes, como de arrendamiento financiero, no deja de ser un contrato de carácter civil cuya reglamentación compete a las entidades de la federación; pues bien, asiste la razón al peticionario de garantías en el sentido de que en el caso a estudio se trata de un contrato celebrado entre particulares, de tipo oneroso, cuya finalidad es la de arrendar un bien por un plazo prefijado, y tal vez su posible venta, también lo es que, la formalización de dicho contrato es mediante la celebración de un contrato de arrendamiento financiero, en donde a través de su clausulado, se especifican las obligaciones, derechos, plazos y monto del precio del mismo, así como las sanciones que se aplicarán en caso de



**CORRE DE
LA NACIÓN,
DEL DE ACUERDO**

incumplimiento; contrato que a su vez se encuentra regulado en la Ley General de Organizaciones de Crédito, secundaria al Código de Comercio, legislación ésta del ámbito federal.

CUARTO. *Son infundados los restantes conceptos de violación que el quejoso hace valer, relacionados con la inconstitucionalidad del artículo 33 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, razón por la cual, habrá de negarse el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados.*

El artículo 33 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito establece:

ARTÍCULO 33. *En los contratos de arrendamiento financiero, al ser exigible la obligación y, ante el incumplimiento del arrendatario de las obligaciones consignadas en el mismo, la arrendadora financiera podrá pedir judicialmente la posesión de los bienes objetos del arrendamiento. El juez decretará de plano la posesión cuando le sea pedida en la demanda o durante el juicio, siempre que se acompañe el contrato correspondiente debidamente ratificado ante fedatario público y el estado de cuenta certificado por el contador de la organización auxiliar del crédito de que se trate en los términos de los artículos de esta ley.*

El análisis de dicho precepto legal permite arribar a la conclusión de que el artículo 33 de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares de





Crédito, al prever, ante el incumplimiento del arrendatario, una medida cautelar y provisional, no es inconstitucional al no constituir un acto privativo de naturaleza definitiva.

Efectivamente, en el caso que nos ocupa, los actos de aplicación, no constituyen un acto privativo de naturaleza definitiva pues solamente restringen el ejercicio de algún derecho, de manera temporal, por tratarse de medida provisional con la finalidad cautelar respecto de ciertos bienes jurídicos que de otra manera no sería posible proteger con oportunidad.



CORTE DE
LA NACION,
1. DE ACUERDO,

Por la misma razón, esos actos, no requieren de la observancia de la garantía de audiencia previa, pues dichos actos de molestia, caso contrario, con lo que sucede con los actos privativos que tienen por objeto la disminución, menoscabo o supresión, de manera definitiva de derechos de los gobernados en los que sí se debe observar dicha garantía.

Así las cosas, la medida que autoriza a decretar el artículo 33 de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, consistente en que en los contratos de arrendamiento financiero, al ser exigible la obligación y, ante el incumplimiento del arrendatario de las obligaciones consignadas en el mismo, la arrendadora financiera podrá pedir judicialmente la posesión de los bienes objeto del arrendamiento, no es inconstitucional, habida cuenta de que las

necesidades del crédito justifican la tramitación de juicios de carácter ejecutivo, mismos que por su propia naturaleza se inician con un procedimiento de ejecución.

Consecuentemente, y toda vez que las características inherentes a la referida providencia cautelar son las que justifican su existencia, el artículo 33 de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito resulta ser constitucional, porque se trata de una mera medida provisional que no requiere de la observancia de la garantía previa de audiencia, todo lo cual conduce a negar al quejoso el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado.

Tienen aplicación a lo anterior la jurisprudencia número 20/96 visible en la página número (sic) del rubro y tenor siguiente:

"ARRENDAMIENTO FINANCIERO. EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DE CRÉDITO, AL PREVER, ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL ARRENDATARIO, UNA MEDIDA CAUTELAR Y PROVISIONAL, NO ES INCONSTITUCIONAL AL NO CONSTITUIR UN ACTO PRIVATIVO DE NATURALEZA DEFINITIVA. Con relación a la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 constitucional y a efecto de establecer qué actos no requieren de la observancia de la audiencia previa y cuáles sí, existen criterios jurisprudenciales, que distinguen entre actos de molestia y actos privativos. Ahora bien, a los





CORTE DE
LA FAMILIA,
VAL DE GUAYABATE

primeros se les ha conceptuado como aquellos actos que solamente restringen el ejercicio de algún derecho, de manera temporal, por tratarse de medidas provisionales con la finalidad cautelar respecto de ciertos bienes jurídicos que de otra manera no sería posible proteger con oportunidad, hasta en tanto que a los segundos, se les ha definido como aquellos actos que tienen por objeto la disminución, menoscabo o supresión, de manera definitiva de derecho de los gobernados. Dentro de este contexto diferenciados de unos y otros actos, resulta que la medida que autoriza a decretar el artículo 33 de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, consistente en que en los contratos de arrendamiento financiero, al ser exigible la obligación y, ante el incumplimiento del arrendatario de las obligaciones consignadas en el mismo, la arrendadora financiera podrá pedir judicialmente la posesión de los bienes objeto del arrendamiento, no es inconstitucional, habida cuenta de que las necesidades del crédito justifican la tramitación de juicios de carácter ejecutivo, mismos que por su propia naturaleza se inician con un procedimiento de ejecución. Este orden de ideas, y toda vez que las características inherentes a la referida providencia cautelar son las que justifican su existencia, resulta ser constitucional, porque se trata de una mera medida provisional que no

requiere de la observancia de la garantía previa de audiencia.

Dicha negativa se hace extensiva a los actos de aplicación y ejecución que reclama del juez responsable y actuarios de su adscripción, en virtud de que no se reclaman por vicios propios, sino que su ilegalidad se hace derivar de la inconstitucionalidad con la cual se tilda el artículo 33 de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito."

TERCERO. El recurrente hizo valer los siguientes agravios:

"1. Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, viola con la resolución constitucional que se combate los artículos 76, 77, 78 y 79, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 14, 124 y 133, constitucionales, al sostener en el considerando tercero de la sentencia que se combate lo siguiente:

"...TERCERO. Por cuestión de método se analizará el concepto de violación que se vierte en el sentido de que el Congreso de la Unión no es competente para legislar en el caso que nos ocupa, porque aun cuando la Ley General de Organizaciones Auxiliares de Crédito, denomina al contrato celebrado entre las partes, como de arrendamiento financiero no deja de ser un contrato de carácter civil cuya reglamentación corresponde a las entidades de la federación; pues bien, asiste la



razón al peticionario de garantías en el sentido de que en el caso a estudio se trata de un contrato celebrado entre particulares, de tipo oneroso, cuya finalidad es la de arrendar un bien a un plazo prefijado, y tal vez su posible venta, también lo es que, la formalización de dicho contrato es mediante la celebración de un contrato de arrendamiento financiero, en donde a través de su clausurado, se especifican las obligaciones, derechos, plazos y monto del precio del mismo, así como las sanciones que se aplicarán en caso de incumplimiento; contrato que a su vez se encuentra regulado en la Ley General de Organizaciones de Crédito, secundaria al Código de Comercio, Legislación ésta del ámbito federal...

CORTE DE
LA NACION
A DE ACUERDO:

Determinación que trasciende el segundo punto resolutivo que resuelve que: "La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a BENJAMÍN FRANCISCO VILLAESCUSA MOLINA, en contra de los actos de las autoridades precisadas en el considerando segundo del presente fallo."

En efecto, el resolutor viola las disposiciones delatadas como tales, al analizar el concepto de violación que mi representado hace valer en el juicio de amparo, en relación de que la aprobación, expedición, prorrogación, publicación y consecuente aplicación en perjuicio del quejoso, del artículo 33 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, viola los

artículos 124 y 133 de la Constitución General de la República, al establecer lo siguiente:

1. Le asiste la razón al peticionario de garantías, en el sentido de que en el caso a estudio, se trata de un contrato celebrado entre particulares, de tipo oneroso, cuya finalidad es la de arrendar un bien por un plazo prefijado, y tal vez su posible venta;

2. También lo es que la formalización de dicho contrato es mediante la celebración de un contrato de arrendamiento financiero, donde a través de su clausulado, se especifican las obligaciones, derechos, plazos y monto del precio mismo, así como las sanciones que se aplicarán en caso de incumplimiento.

3. Contrato que a su vez se encuentra regulado en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, secundaria al Código de Comercio, legislación ésta del ámbito federal.

Sin embargo, el Juez es omiso en resolver el concepto de violación, hecho valer por la parte que represento en relación a la aprobación, expedición y consecuente aplicación en perjuicio de mi representado, del artículo 33 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, que es contrario a los artículos 124 y 133 de la Constitución General de la República, por lo que deja intocado el agravio en relación de que el Congreso de la Unión no está facultado para legislar en materia de arrendamiento y por lo mismo que el Juez y demás autoridades ejecutoras

SUPREMA
JUSTICIA DI
SECRETARIA GEN



no deben aplicar en perjuicio del quejoso tal disposición.

En efecto, en el artículo 124 de la Constitución General de la República, se establece que: "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados."

Luego entonces, si no hay ninguna disposición que faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de ARRENDAMIENTOS, es incuestionable que tal FACULTAD le corresponde a los ESTADOS, por lo tanto, cuando la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, expedida por el Congreso de la Unión, REGLAMENTA EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, contraviene el PACTO FEDERAL, porque INVADIR LA ESFERA DE COMPETENCIA DE LOS ESTADOS, ya que solamente éstos pueden dictar leyes de acuerdo con su propia Constitución Local que reglamente el contrato de arrendamiento.



CORTE DE
LA FACION
DE ACUERDO

Ahora bien, a pesar de que la Ley General de Organizaciones Auxiliares de Crédito, al contrato que nos ocupa, le da la denominación de arrendamiento financiero, no deja de ser un contrato de carácter civil, cuya reglamentación compete a las entidades federativas y no a la federación y por lo mismo la aplicación de las disposiciones relativas en perjuicio de la quejosa

se traduce en violación de garantías por contravenir el Pacto Federal.

El artículo 33 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, viola el artículo 133 en cuanto a que se trata de una Ley del Congreso de la Unión que lo contraviene, por lo que el Juez Tercero del Ramo Civil (hoy Juez Segundo de lo Mercantil), de esta ciudad y demás autoridades ejecutoras señaladas como responsables lo aplican indebidamente en el presente caso en perjuicio de mi representado.

Consecuentemente, el Juez Primero de Distrito del Estado de Sonora, al negar el amparo y protección de la Justicia Federal, causa agravio a mi representado, en virtud de que el Congreso de la Unión no está facultado, para legislar en materia de arrendamiento de acuerdo a lo que establece el artículo 124 constitucional, al no concederle de manera expresa dicha facultad al Congreso de la Unión, por lo que tal facultad corresponde a las entidades federativas, por lo tanto, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, expedida por el Congreso de la Unión, al reglamentar el contrato de arrendamiento financiero, contraviene el Pacto Federal, porque invade la esfera de competencia de los Estados, ya que solamente éstos, como ya precisé pueden dictar leyes de acuerdo con su propia Constitución Local, que reglamente el contrato de arrendamiento.





No es obstáculo a lo anterior el que el contrato de arrendamiento financiero aún con sus características especiales sea regulado en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, secundaria al Código de Comercio, legislación ésta del ámbito federal, porque el problema no es en sí que una ley secundaria dependa de otra de carácter federal, sino que aquélla fuese expedida y aprobada por el Congreso de la Unión en una materia que no está facultada para hacerlo, invadiendo facultades que la Constitución expresamente no le concede.



ORTE DE
NACION.
DE ACUERDOS.

Así pues, el hecho de que se trate de un arrendamiento financiero con ciertas características especiales, del carácter del arrendador y de la forma en que se adquiere el bien materia del contrato, de cualquier modo, en esencia se trata de un arrendamiento liso y llano, tal y como se regula en los Códigos Civiles de toda la República y del Distrito Federal, puesto que el propietario del bien arrendado sigue tendiendo el carácter de arrendador frente al usuario o usufructuario del mismo, quien en cambio del uso se obliga a pagar una compensación de rentas por el uso temporal que se le trasmite; consecuentemente no hay duda que se trata de un contrato que de acuerdo con su naturaleza comparte las características del arrendamiento civil, por lo que su regulación en materia federal contraviene el Pacto Federal, consistente en que

las facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados, por lo que si no hay ninguna disposición que faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de arrendamiento, es incuestionable que tal facultad le corresponde a los ESTADOS.

Por lo expuesto, la aplicación en perjuicio del quejoso del artículo 33 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito implica en su perjuicio una violación de garantías que esa H. Suprema Corte deba dejar sin efecto al conceder a mi representado el amparo y protección de la Justicia."



SUPREMA C
JUSTICIA DE L
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y F

CUARTO. Debe confirmarse el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito en el resolutivo primero de la sentencia recurrida en relación con el considerando primero del mismo fallo, tocante de los actos reclamados al Director General de la Policía Judicial del Estado de Sonora, Jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal y Comandante de Unidad de la Policía y Tránsito Municipal Zona Norte, estos dos últimos de Hermosillo, Sonora.

La anterior postura dimana de la circunstancia relativa a que del examen cuidadoso del capítulo de agravios del escrito de revisión, se advierte que el inconforme no hace valer al respecto ningún argumento.



QUINTO. Ahora bien, lo que el recurrente aduce es que en la sentencia recurrida, el Juez de Distrito omitió resolver el concepto de violación esgrimido en cuanto a que la aprobación y expedición del artículo 33 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, viola lo dispuesto por los artículos 124 y 133 constitucionales.

Sobre el particular, de la sentencia recurrida se advierte que en el considerando tercero, el Juez de Distrito precisó el concepto de violación de que se hace mención, identificado como segundo en la demanda de garantías, al señalar:



CORTE DE
LA NACION.
DE ACUERDOS

"Por cuestión de método se analizará el concepto de violación que se vierte en el sentido de que el Congreso de la Unión no es competente para legislar en el caso que nos ocupa, porque aun cuando la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, denomina al contrato celebrado entre las partes, como de arrendamiento financiero, no deja de ser un contrato de carácter civil cuya reglamentación compete a las entidades de la federación..."

Al respecto, el juzgador federal sostuvo:

"...pues bien, asiste la razón al peticionario de garantías en el sentido de que en el caso a estudio se trata de un contrato celebrado entre particulares, de tipo oneroso, cuya finalidad es la de arrendar un bien por un plazo prefijado, y tal vez

su posible venta, también lo es que, la formalización de dicho contrato es mediante la celebración de un contrato de arrendamiento financiero, en donde a través de su clausulado, se especifican las obligaciones, derechos, plazos y monto del precio del mismo, así como las sanciones que se aplicarán en caso de incumplimiento; contrato que a su vez se encuentra regulado en la Ley General de Organizaciones de Crédito, secundaria al Código de Comercio, legislación ésta del ámbito federal."

De la anterior exposición se desprende que el Juez de Distrito se pronunció en relación con el mencionado concepto de violación, determinando que el arrendamiento financiero se encuentra regulado en una legislación secundaria al Código de Comercio, que es del ámbito federal, lo que implica, en función al contenido del argumento relativo, una respuesta en el sentido de que el Congreso de la Unión tiene facultades para legislar respecto del contrato de arrendamiento financiero.

Esa conclusión a la que arribó el juzgador federal, aunque poco razonada, es básicamente correcta, por las razones que enseguida se exponen.

Del mencionado segundo concepto de violación de la demanda de garantías, que el recurrente reseña íntegramente en su escrito de agravios, se desprende que el planteamiento del que hace depender la carencia de facultades del Congreso de la Unión para legislar en materia de arrendamiento financiero, es el



de que este contrato no deja de ser un arrendamiento de carácter civil cuya reglamentación compete a las legislaturas de los Estados en términos de lo dispuesto por el artículo 124 constitucional.

No asiste razón al quejoso, pues el arrendamiento financiero es un contrato de naturaleza mercantil que entraña la realización de actos de comercio.

Para corroborar tal postura, es pertinente distinguir las diferencias existentes entre un arrendamiento civil y un arrendamiento financiero.



El arrendamiento civil, que se encuentra regulado por el derecho común, en el Distrito Federal, por el Título Sexto, de la Segunda Parte, del Libro Cuarto, del Código Civil, específicamente por los artículos del 2398 al 2496, es el contrato en virtud del cual una persona se obliga a conceder el uso o goce temporal de una cosa y otra, a pagar por ese uso o goce un precio cierto. El propósito perseguido mediante el pacto, es la de que una parte disfrute del beneficio que le produce el uso del bien arrendado y la otra disfrute del producto que da el permitir el uso de ese bien.

Conforme a los derechos y obligaciones legales de las partes, el arrendatario tiene, entre otros, el derecho fundamental de usar la cosa, conforme a su naturaleza y lo convenido en el contrato, derecho correlativo a la obligación del arrendador de entregar la cosa en buen estado, precisamente para que sea usada por el arrendatario. Por su parte, el arrendador tiene el

derecho a recibir una contraprestación del arrendatario, es decir, el pago de la renta.

Como es fácil de advertir, en el contrato de arrendamiento civil no hay intención de transmitir por una de las partes y de adquirir por la otra, la cosa. La función de esta especie de convenio es la de procurar al propietario de la cosa, que no necesite o no esté en condiciones de recabar de ella una utilidad directa, un disfrute indirecto, mediante la obtención de un equivalente del goce concedido a otro, sin perder la propiedad de ella y, por otra parte, extender la posibilidad de goce de las cosas a quien no puede o no quiera adquirir la propiedad.

Para comprender la diversa naturaleza del arrendamiento financiero, es preciso hacer remisión a las disposiciones que le dan existencia y lo regulan en el derecho mexicano, que son las de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, específicamente, su Capítulo Tercero, artículos 24 a 38.

"CAPÍTULO II

De las Arrendadoras Financieras

ARTÍCULO 24. *Las sociedades que disfruten de autorización para operar como arrendadoras financieras, sólo podrán realizar las siguientes operaciones:*

- I. Celebrar contratos de arrendamiento financiero a que se refiere el artículo 25 de esta Ley;***
- II. Adquirir bienes, para darlos en arrendamiento financiero;***



III. Adquirir bienes del futuro arrendatario, con el compromiso de darlos a éste en arrendamiento financiero;

IV. Obtener préstamos y créditos de instituciones de crédito, de seguros y de fianzas del país o de entidades financieras del exterior, destinados a la realización de las operaciones que se autorizan en este capítulo así como de proveedores, fabricantes o constructores de los bienes que serán objeto de arrendamiento financiero;

IV-Bis. Emitir obligaciones subordinadas y demás títulos de crédito, en serie o en masa, para su colocación entre el gran público inversionista;

V. Obtener préstamos y créditos de instituciones de crédito del país o de entidades financieras del exterior, para cubrir necesidades de liquidez, relacionadas con su objeto social;

VI. (DEROGADA, D. O. 3 DE ENERO DE 1990)

VII. (DEROGADA, D. O. 3 DE ENERO DE 1990)

VIII. Descontar, dar en garantía o negociar los títulos de crédito y afectar los derechos provenientes de los contratos de arrendamiento financiero o de las operaciones autorizadas a las arrendadoras, con las personas de las que reciban financiamiento, en términos de la fracción IV anterior así como afectar en fideicomiso irrevocable los títulos de crédito y los derechos provenientes de los contratos de arrendamiento financiero a efecto de garantizar el pago de las



CORTE DE
LA NACION
RAL DE ACUERDOS

emisiones a que se refiere la fracción IV-Bis de este artículo;

IX. Constituir depósitos, a la vista y a plazo, en instituciones de crédito y bancos del extranjero, así como adquirir valores aprobados para el efecto por la Comisión Nacional de Valores;

X. Adquirir muebles e inmuebles destinados a sus oficinas;

XI. Las demás que en ésta u otras leyes se les autorice; y

XII. Las demás operaciones análogas y conexas que, mediante reglas de carácter general, autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión Nacional Bancaria del Banco de México."



SUPREMA CO
JUSTICIA DE LA
SECRETARÍA DE HACIENDA

"ARTÍCULO 25. *Por virtud del contrato de arrendamiento financiero, la arrendadora financiera se obliga a adquirir determinados bienes y a conceder su uso o goce temporal, a plazo forzoso, a una persona física o moral, obligándose ésta a pagar como contraprestación, que se liquidará en pagos parciales, según se convenga, una cantidad en dinero determinada o determinable, que cubra el valor de adquisición de los bienes, las cargas financieras y los demás accesorios, y adoptar al vencimiento del contrato alguna de las opciones terminales a que se refiera el artículo 27 de esta Ley.*



Al establecer el plazo forzoso a que hace mención el párrafo anterior, deberán tenerse en cuenta las condiciones de liquidez de la arrendadora financiera, en función de los plazos de los financiamientos que, en su caso, haya contratado para adquirir los bienes.

Los contratos de arrendamiento financiero deberán otorgarse por escrito y ratificarse ante la fe de notario público, corredor público titulado, o cualquier otro fedatario público y podrán inscribirse en el Registro Público de Comercio, a solicitud de los contratantes, sin perjuicios de hacerlo en otros Registros que las leyes determinen."



ORTE DE
NACION.
DE ACUERDO

"ARTÍCULO 26. La arrendataria podrá otorgar a la orden de la arrendadora financiera, uno a varios pagarés, según se convenga, cuyo importe total corresponda al precio pactado, por concepto de renta global, siempre que los vencimientos no sean posteriores al plazo del arrendamiento financiero y que se haga constar en tales documentos su procedencia de manera que queden suficientemente identificados. La transmisión de esos títulos implica en todo caso el traspaso de la parte correspondiente de los derechos derivados del contrato de arrendamiento financiero y demás derechos accesorios en la proporción que correspondan.

La suscripción y entrega de estos títulos de crédito, no se considerarán como pago de la contraprestación ni de sus parcialidades."

"ARTÍCULO 27. Al concluir el plazo del vencimiento del contrato una vez que se hayan cumplido todas las obligaciones, la arrendataria deberá adoptar alguna de las siguientes opciones terminales:

I. La compra de los bienes a un precio inferior a su valor de adquisición, que quedará fijado en el contrato. En caso de que no se haya fijado, el precio debe ser inferior al valor de mercado a la fecha de compra, conforme a las bases que se establezcan en el contrato;

II. A prorrogar el plazo para continuar con el uso o goce temporal, pagando una renta inferior a los pagos periódicos que venía haciendo, conforme a las bases que se establezcan en el contrato; y

III. A participar con la arrendadora financiera en el precio de la venta de los bienes a un tercero, en las proporciones y términos que se convengan en el contrato.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante disposiciones de carácter general, está facultada para autorizar otras opciones terminales siempre que se cumplan los requisitos señalados en el primer párrafo del artículo 25 de esta Ley.

En el contrato podrá convenirse la obligación de la arrendataria de adoptar, de antemano, alguna de las opciones antes señaladas, siendo responsable





de los daños y perjuicios en caso de incumplimiento. La arrendadora financiera no podrá oponerse al ejercicio de dicha opción.

Si en los términos del contrato, queda la arrendataria facultada para adoptar la opción terminal al finalizar el plazo obligatorio, ésta deberá notificar por escrito a la arrendadora financiera, por lo menos con un mes de anticipación al vencimiento del contrato, cuál de ellas va a adoptar, respondiendo de los daños y perjuicios en caso de omisión, con independencia de lo que se convenga en el contrato."



ORTE DE
NACION
DE GUERRA

"ARTÍCULO 28. En los contratos de arrendamiento financiero, podrá establecerse que la entrega material de los bienes sea realizada directamente a la arrendataria por el proveedor, fabricante o constructor, en las fechas previamente convenidas, debiendo aquella entregar constancia del recibo de los bienes a la arrendadora financiera. Salvo pacto en contrario, la obligación de pago del precio del arrendamiento financiero se inicia a partir de la firma del contrato, aunque no se haya hecho la entrega material de los bienes objeto del arrendamiento.

En los casos a que se refiere el párrafo anterior, la arrendadora financiera estará obligada a entregar a la arrendataria los documentos necesarios para que la misma quede legitimada a fin de recibirlos directamente."

“ARTÍCULO 29. Salvo pacto en contrario, la arrendataria queda obligada a conservar los bienes en el estado que permita el uso normal que les corresponda, a dar el mantenimiento necesario para este propósito y, consecuentemente, a hacer por su cuenta las reparaciones que se requieran, así como a adquirir las refacciones e implementos necesarios, según se convenga en el contrato. Dichas refacciones, implementos y bienes que se adicionen a los que sean objeto del arrendamiento financiero, se considerarán incorporados a éstos y, consecuentemente, sujetos a los términos del contrato.

La arrendataria debe servirse de los bienes solamente para el uso convenido, o conforme a la naturaleza y destino de éstos, siendo responsable de los daños que los bienes sufran por darles otro uso, o por su culpa o negligencia, o la de sus empleados o terceros.”

“ARTÍCULO 30. La arrendataria deberá seleccionar al proveedor, fabricante o constructor y autorizar los términos, condiciones y especificaciones que se contengan en el pedido u orden de compra, identificando y describiendo los bienes que se adquirirán.

Las arrendadoras financieras no serán responsables de error u omisión en la descripción de los bienes objeto del arrendamiento contenida





en el pedido u orden de compra. La firma de la arrendataria en cualquiera de estos últimos documentos implica, entre otros efectos, su conformidad con los términos, condiciones, descripciones y especificaciones ahí consignados."

"ARTÍCULO 31. Salvo pacto en contrario, son a riesgo de la arrendataria:

I. Los vicios o defectos ocultos de los bienes que impidan su uso parcial o total. En este caso, la arrendadora financiera transmitirá a la arrendataria los derechos que como compradora tenga, para que ésta los ejercite en contra del vendedor, o la legitimará para que la arrendataria en su representación ejercite dichos derechos;

II. La pérdida parcial o total de los bienes, aunque ésta se realice por causa de fuerza mayor o caso fortuito; y

III. En general, todos los riesgos, pérdidas, robos, destrucción o daños que sufrieren los bienes dados en arrendamiento financiero.

Frente a las eventualidades señaladas, la arrendataria no queda liberada del pago de la contraprestación, debiendo cubrirla en la forma que se haya convenido en el contrato."

"ARTÍCULO 32. En casos de despojo, perturbación o cualquier acto de tercero, que afecten el uso o goce de los bienes, la posesión de los mismos o

bien la propiedad, la arrendataria tiene la obligación de realizar las acciones que correspondan para recuperar los bienes o defender el uso o goce de los mismos. Igualmente, estará obligada a ejercer las defensas que procedan, cuando medie cualquier acto o resolución de autoridad que afecten la posesión o la propiedad de los bienes.

Cuando ocurra alguna de estas eventualidades, la arrendataria debe notificarlo a la arrendadora financiera, a más tardar el tercero (sic) día hábil siguiente al que tenga conocimiento de esas eventualidades, siendo responsable de los daños y perjuicios, si hubiese omisión. La arrendadora financiera, en caso de que no se efectúen o no se ejerciten adecuadamente las acciones o defensas, o por convenir así a sus intereses, podrá ejercitar directamente dichas acciones o defensas, sin perjuicio de las que realice la arrendataria.

La arrendadora financiera estará obligada a legitimar a la arrendataria para que, en su representación, ejercite dichas acciones o defensas, cuando ello sea necesario."

"ARTÍCULO 33. En los contratos de arrendamiento financiero, al ser exigible la obligación y, ante el incumplimiento del arrendatario de las obligaciones consignadas en el mismo, la arrendadora financiera podrá pedir judicialmente la posesión de los bienes objeto del arrendamiento.





El juez decretará de plano la posesión cuando le sea pedida en la demanda o durante el juicio, siempre que se acompañe el contrato correspondiente debidamente ratificado ante fedatario público y el estado de cuenta certificado por el contador de la organización auxiliar del crédito de que se trate, en los términos del artículo 47 de esta Ley."



GOBIERNO DE
LA NACION
SECRETARÍA DE
AGRICULTURA

"ARTÍCULO 34. En los contratos de arrendamiento financiero deberá establecerse la obligación de que se cuente con seguro o garantía que cubra, en los términos que se convengan, por lo menos, los riesgos de construcción, transportación, recepción e instalación, según la naturaleza de los bienes, los daños o pérdidas de los propios bienes, con motivo de su posesión y uso, así como las responsabilidades civiles y profesionales de cualquier naturaleza, susceptibles de causarse en virtud de la explotación o goce de los propios bienes, cuando se trate de bienes que pueda causar daños a terceros, en sus personas o en sus propiedades.

En los contratos o documentos en que conste la garantía deberá señalarse como primer beneficiario a la arrendadora financiera, a fin de que, en primer lugar, con el importe de las indemnizaciones se cubran a ésta los saldos pendientes de la obligación concertada, o las responsabilidades a que queda obligada como propietaria de los bienes.

Si el importe de las indemnizaciones pagadas, no cubre dichos saldos o responsabilidades, la arrendataria queda obligada al pago de los faltantes."

"ARTÍCULO 35. *Las arrendadoras financieras podrán proceder a contratar los seguros a que se refiere el artículo anterior, en caso de que habiéndose pactado en el contrato que el seguro deba ser contratado por la arrendataria, ésta no realizará la contratación respectiva dentro de los tres días siguientes a la celebración del contrato, sin perjuicio de que contractualmente esta omisión se considere como causa de rescisión.*

Las primas y los gastos del seguro serán por cuenta de la arrendataria."



SUPREMA
JUSTICIA DE
SECRETARÍA GENERAL

"ARTÍCULO 36. *Las operaciones a que se refieren las fracciones IV y V del artículo 24 de esta Ley que celebren las arrendadoras financieras, se someterán en cuanto a sus límites y condiciones, a las reglas de carácter general que en su caso expida el Banco de México.*

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá, oyendo a la Comisión Nacional Bancaria, mediante disposiciones de carácter general, las obligaciones contingentes que puedan asumir las arrendadoras financieras en los contratos de arrendamiento financiero, cuando dichas obligaciones contingentes sean distintas a



las señaladas en la fracción VIII del artículo 24, señalando además, el monto máximo de estos pasivos que se les autorice contraer."

"ARTÍCULO 37. El importe del capital pagado y reservas de capital de las arrendadoras financieras, deberá estar invertido en operaciones propias del objeto de estas sociedades, así como en los bienes muebles e inmuebles que están autorizadas a adquirir.



ORTE DE
LA NACION
DE AGUASCALIENTES

No excederá del sesenta por ciento del capital pagado y reservas de capital, el importe de las inversiones en mobiliario, equipo e inmuebles destinados a sus oficinas, más el importe de la inversión en acciones de sociedades a que se refieren los artículos 68 y 69 de esta Ley y de aquellas que se organicen exclusivamente para adquirir el dominio y administrar inmuebles, siempre que en alguno de éstos, propiedad de la sociedad, la arrendadora financiera tenga establecida o establezca su oficina principal o alguna sucursal u oficina de representación. La inversión en dichas acciones y los requisitos que deban satisfacer las sociedades a que se hace referencia, se sujetarán a las reglas generales que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El importe de los gastos de instalación no podrá exceder del diez por ciento del capital pagado y reservas de capital.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará mediante disposiciones de carácter general las reservas de capital computables para efectos de este artículo."

"ARTÍCULO 37-A. (DEROGADO, D. O. 15 DE JULIO DE 1993)"

"ARTÍCULO 37-B. Las arrendadoras financieras, sin perjuicio de mantener el capital mínimo previsto por esta Ley, deberán tener un capital contable por un monto no menor de la cantidad que resulte de aplicar un porcentaje que no será inferior al seis por ciento, a la suma de sus activos y en su caso de sus operaciones causantes de pasivo contingente, expuestos a riesgo significativo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y del Banco de México, y tomando en cuenta los usos internacionales en la materia determinará cuáles activos y pasivos contingentes deberán considerarse dentro de la mencionada suma así como el porcentaje aplicable en los términos del presente artículo.

Para efectos de este artículo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo previamente a la Comisión Nacional Bancaria y al Banco de México, señalará los conceptos que se considerarán integrantes del capital contable de las arrendadoras financieras."





"ARTÍCULO 37-C. El importe máximo de las responsabilidades a favor de una arrendadora financiera y a cargo de una sola persona o grupo de personas que, por nexos patrimoniales o de responsabilidad, constituyan riesgos comunes, no excederá de los límites que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores."

"ARTÍCULO 38. A las arrendadoras financieras les está prohibido:

I. Operar con sus propias acciones, salvo en los casos previstos en la Ley del Mercado de Valores;

II. (DEROGADA, D. O. 15 DE JULIO DE 1993)

III. Celebrar operaciones en virtud de las cuales resulten o puedan resultar deudores de la arrendadora, los directores generales o gerentes generales, salvo que correspondan a préstamos de carácter laboral; los comisarios propietarios o suplentes, estén o no en funciones; los auditores externos de la arrendadora; o los ascendientes o descendientes en primer grado o cónyuges de las personas anteriores. La violación a lo previsto en esta fracción se sancionará conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de esta Ley;

IV. Recibir depósitos bancarios de dinero;

V. Otorgar fianzas o cauciones;

VI. Adquirir bienes, títulos o valores, mobiliario o equipo no destinados a sus oficinas o a celebrar



CORTO DE
LA NACIÓN
DE ACUERDOS

operaciones propias de su objeto social, que no deban conservar en su activo. Si por adjudicación o cualquier otra causa adquiriesen tales bienes, deberán proceder a su venta, la que se realizará, en el plazo de un año, si se trata de bienes muebles, o de dos años, si son inmuebles.

Cuando se trate de bienes que las arrendadoras financieras hayan recuperado, por incumplimiento de las arrendatarias, podrán ser dados en arrendamiento financiero a terceros, si las circunstancias lo permiten. En caso contrario, se procederá en los términos del párrafo anterior;

VII. Realizar operaciones con oro, plata y divisas. Se exceptúan las operaciones con divisas relacionadas con financiamientos o con contratos que celebren en moneda extranjera, o cuando se trate de operaciones en el extranjero vinculadas a su objeto social, las cuales se ajustarán en todo momento a las disposiciones de carácter general que, en su caso, expida el Banco de México; y

VIII. Realizar las demás operaciones que no les estén expresamente autorizadas."



De las disposiciones antes transcritas se desprende que el arrendamiento financiero es el contrato en virtud del cual una organización auxiliar de crédito denominada arrendadora financiera se obliga a adquirir determinados bienes y a conceder su uso y goce temporal, a plazo forzoso, a una persona física o colectiva, obligándose ésta a pagar como prestación, que se liquidará en pagos parciales, según se convenga, una cantidad



de dinero determinada o determinable, que cubra el valor de adquisición de los bienes, las cargas financieras y los demás accesorios, y a adoptar, al vencimiento del contrato, alguna de las siguientes opciones: compra de los bienes, prórroga del contrato, participación en el precio de venta de los bienes (artículo 25).

Basta lo anterior para entender que la finalidad del arrendamiento financiero, no es únicamente el uso de la cosa, sino que se celebra teniendo siempre en cuenta la posibilidad de que el arrendatario se financie, adquiera la propiedad del bien u obtenga un beneficio adicional al uso, si se da el caso de que el bien arrendado se venda y del producto de la venta le corresponda parte al propio arrendatario. Por consiguiente, no es el contrato de arrendamiento llano y tradicional, dado que las partes lo celebran con intención más allá del simple uso de la cosa y, tampoco es un arrendamiento con opción a compra, porque no es, en todo caso, la única intención de las partes; asimismo, no es una compra venta a plazo, simple y sencillamente porque no es esa la intención de los contratantes. Es simplemente un contrato que opera según sus propias características regulado por la ley que lo reconoce actualmente, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito.

Un concepto básico que distingue al arrendamiento civil del arrendamiento financiero, es que el primero puede celebrarlo cualquier sujeto propietario y aun el subarrendatario de un determinado bien, en tanto que el contrato de arrendamiento financiero solamente puede celebrarlo una organización auxiliar

de crédito que es la única con facultades para ello. De esta forma, el arrendamiento financiero se entiende como un instrumento de financiamiento.

En efecto, el artículo 1º de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, señala que las disposiciones de la propia ley se aplicarán a las organizaciones auxiliares de crédito, mismas que enuncia el artículo 3º, dentro de las cuales están las arrendadoras financieras.

Para la constitución y operación de estas organizaciones, es necesario contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, escuchando la opinión de la Comisión Nacional Bancaria, con carácter de intransmisible, artículo 5º de la mencionada ley. A propósito del funcionamiento de las arrendadoras financieras, el artículo 8º de la citada legislación, establece como un requisito más, que debe constituirse como sociedad anónima.

Luego, sólo las sociedades que disfruten de la mencionada autorización pueden realizar las operaciones que se encuentran enumeradas en el artículo 24 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, cuya fracción I menciona precisamente que están facultadas para celebrar contratos de arrendamiento financiero, en la fracción II les permite adquirir bienes para darlos en arrendamiento financiero y la fracción III también las faculta para adquirir bienes del futuro arrendatario, con el compromiso de darlos a éste en arrendamiento financiero.



Otra de las notas que distinguen al arrendamiento financiero es la de que la conclusión del plazo fijado como duración del contrato no basta para darlo por terminado, sino que ocurrido esto se actualiza el derecho del arrendatario para adoptar alguna de las opciones terminales que establece el artículo 27 de la ley en consulta.

Las opciones son tres: la primera consiste en que el arrendatario decida adquirir en propiedad los bienes que ha venido disfrutando en su uso. Si así decide, el precio que se fija para la venta debe ser siempre menor a aquél que pagó la arrendadora financiera al comprarlos.



La segunda opción se traduce en que el arrendatario puede continuar en el uso o goce de los bienes, es decir, se prorroga el plazo señalado en el contrato, y se fija una renta más baja.

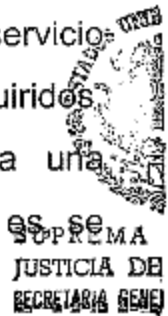
Por último, el arrendatario puede elegir por participar con la arrendadora financiera en el precio de la venta de los bienes a un tercero, en la proporción y términos que se convengan en el contrato.

El arrendatario es libre para decidirse por cualquier opción, a menos que en el contrato se le obligue a tomar alguna, siendo responsable de los daños y perjuicios en caso de incumplimiento.

De acuerdo con lo anterior, es inconcuso que no asiste razón al quejoso en cuanto a que el arrendamiento financiero es de naturaleza civil, destacando de entre las notas distintivas

enunciadas como determinante de la naturaleza mercantil de este contrato, la tocante a que su práctica corresponde, exclusivamente, a una organización considerada auxiliar de crédito, es decir, se está ante la presencia de una empresa, a través de la cual se realizan las operaciones.

Así, la participación en el contrato de una empresa auxiliar del crédito, es el elemento determinante para establecer la mercantilidad del arrendamiento financiero, en tanto que ésta efectúa el ejercicio profesional de una actividad económica con un fin de intermediación para proporcionar un servicio que tiene como base, a su vez, una actividad de financiamiento. El servicio que consiste en la transmisión del o de los bienes adquiridos obliga a quien los recibe a cubrir a la arrendadora una contraprestación, lo que trae aparejada una utilidad, esto es, se logra la especulación mercantil.



En ese orden de ideas, para sustentar la mercantilidad del contrato de arrendamiento financiero cobran exacta aplicación las fracciones I y II del artículo 75 del Código de Comercio, dado que tales disposiciones consideran acto de comercio las adquisiciones, enajenaciones y alquileres de muebles, y las enajenaciones de inmuebles, con el propósito de especulación comercial; aspectos que se actualizan en la operación de que se trata, pues la arrendadora adquiere, en primer lugar los bienes, y en segundo lugar los alquila, con posibilidad de enajenarlos; actos en los que hay una intención o propósito de lucro, por lo que el contrato de que se trata, no hay duda, es mercantil.



Similar criterio al anteriormente expuesto fue sustentado por la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia, en la tesis visible en el Informe rendido a este Alto Tribunal por su Presidente al terminar el año de 1987, Parte II, página 253, que dice:

"ARRENDAMIENTO FINANCIERO. ES UN CONTRATO DE NATURALEZA MERCANTIL. El arrendamiento financiero aunque es una operación compleja puesto que participa de las notas características de una operación de crédito, del arrendamiento y de la compraventa, o sea que se compone de elementos diversos, debe considerarse como un contrato mercantil, dado que es claro el propósito de lucro que persigue el arrendador quien obtiene rendimientos del capital que invierte en el financiamiento, lo que hace que tenga las características del acto mercantil a que alude el artículo 75, fracciones I, II, V, VII y XIII, del Código de Comercio; por ende, es diferente del arrendamiento civil, liso y llano o tradicional y de la compraventa en abonos; así que, no obstante las semejanzas o identidades parciales, no puede ser subsumido o absorbido por tales figuras clásicas o tradicionales."

Las consideraciones que anteceden ponen de manifiesto que es inexacta la afirmación de la que pretende derivarse la carencia de facultades del Congreso de la Unión para legislar en relación con el arrendamiento financiero, puesto que, como se ha

visto, este contrato es naturaleza mercantil no eminentemente civil.

Además, siendo mercantil la naturaleza del arrendamiento financiero, ya que se integra por actos de comercio, es inconcuso que el Congreso de la Unión tiene plenas facultades para legislar al respecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Constitución General de la República, que dice:

“ARTÍCULO 73. El Congreso tiene facultad:

I. (...)

X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123.”



Debe agregarse que dentro de la precitada facultad se encuentra inmerso el poder del Congreso de la Unión de legislar en lo tocante a la resolución del arrendamiento financiero y, por ende, respecto de las normas adjetivas relativas, es decir, de aquéllas que regulan el procedimiento para su resolución judicial, como es la prevista en el artículo 33 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito.

Por analogía sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la anterior integración de esta Suprema Corte de Justicia, consultable en el Semanario Judicial de la



Federación, Séptima Época, Tomos 217-228, Primera Parte, página 38, que dice:

"PROCESO MERCANTIL, FACULTADES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA EXPEDIR LAS DISPOSICIONES RELATIVAS AL. Aunque el artículo 73, fracción X, de la Constitución Federal, establece que el Congreso de la Unión tiene facultades para "legislar en toda la República sobre... comercio", tal atribución no debe interpretarse como que solamente comprende la regulación de los derechos y obligaciones surgidos de las relaciones comerciales, ya que legislar sobre determinada materia debe contemplar además de los anteriores aspectos, los relativos a las sanciones, delitos, infracciones y los procedimientos destinados a aplicarlos, toda vez que esa facultad se encuentra implícita en la que se concedió al legislador para legislar sobre materia de comercio, pues de otra manera no podrían hacerse efectivas las normas que con el fin de regular el comercio se establecen. Por otra parte, por disposición del artículo 73, fracción X, de la Constitución Federal, el derecho substantivo que regula los actos de comercio corresponde a la competencia de la Federación, y conforme al artículo 104, fracción I, de la propia Carta Magna, el conocimiento de tales controversias corresponde en principio, a los tribunales federales, porque se trata del cumplimiento y la aplicación de una ley

federal, como acontece con el Código de Comercio; así las cosas, como para tal fin se requiere un procedimiento y según lo establece el artículo 73, fracción XXX, de la Constitución, el Congreso de la Unión está facultado para expedir las leyes que sean necesarias para hacer efectivas las atribuciones de los tribunales federales, entre las que se encuentran la de dirimir las controversias relacionadas con los actos de comercio, resulta evidente que, conforme a los referidos preceptos, el legislador federal puede dictar las disposiciones procesales para regular el procedimiento destinado a resolver esa especie de controversias."

De lo dispuesto por el transcrito artículo 73, fracción X, constitucional, en relación con las consideraciones vertidas en cuanto a la naturaleza, contenido y partes en el arrendamiento financiero, se desprende la actualización de una razón más que autoriza al Congreso de la Unión a legislar en la materia.

A propósito, antes ya quedó plenamente definido que en la celebración del contrato de arrendamiento financiero es indispensable la participación de una arrendadora financiera que como tal realiza un servicio financiero, para corroborar esta postura es pertinente transcribir lo establecido por el artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, que dice:

"ARTÍCULO 46. Las instituciones de crédito sólo podrán realizar las operaciones siguientes:
I. Recibir depósitos bancarios de dinero;



- a). *A la vista;*
- b). *Retirables en días preestablecidos;*
- c). *De ahorro; y*
- d). *A plazo o con previo aviso;*
- II. *Aceptar préstamos y créditos;*
- III. *Emitir bonos bancarios;*
- IV. *Emitir obligaciones subordinadas;*
- V. *Constituir depósitos en instituciones de crédito y entidades financieras del exterior;*
- VI. *Efectuar descuentos y otorgar préstamos o créditos;*
- VII. *Expedir tarjetas de crédito con base en contratos de apertura de crédito en cuenta corriente;*
- VIII. *Asumir obligaciones por cuenta de terceros, con base en créditos concedidos, a través del otorgamiento de aceptaciones, endoso o aval de títulos de crédito, así como de la expedición de cartas de crédito;*
- IX. *Operar con valores en los términos de las disposiciones de la presente Ley y de la Ley del Mercado de Valores;*
- X. *Promover la organización y transformación de toda clase de empresas o sociedades mercantiles y suscribir y conservar acciones o partes de interés en las mismas, en los términos de esta Ley;*
- XI. *Operar con documentos mercantiles por cuenta propia;*



CORTES DE LA NACION
DE LOS AVILADOS

XII. Llevar a cabo por cuenta propia o de terceros operaciones con oro, plata y divisas, incluyendo reportes sobre estas últimas;

XIII. Prestar servicio de cajas de seguridad;

XIV. Expedir cartas de crédito previa recepción de su importe, hacer efectivos créditos y realizar pagos por cuenta de clientes;

XV. Practicar las operaciones de fideicomiso a que se refiere la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y llevar a cabo mandatos y comisiones;

XVI. Recibir depósitos en administración o custodia, o en garantía por cuenta de terceros, de títulos o valores y en general de documentos mercantiles;

XVII. Actuar como representante común de los
tenedores de títulos de crédito;



XVIII. Hacer servicio de caja y tesorería relativo a títulos de crédito, por cuenta de las emisoras;

XIX. Llevar la contabilidad y los libros de actas y de registro de sociedades y empresas;

XX. Desempeñar el cargo de albacea;

XXI. Desempeñar la sindicatura o encargarse de la liquidación judicial o extrajudicial de negociaciones, establecimientos, concursos o herencias;

XXII. Encargarse de hacer avalúos que tendrán la misma fuerza probatoria que las leyes asignan a los hechos por corredor público o perito;



XXIII. Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de su objeto y enajenarlos cuando corresponda;

XXIV. Celebrar contratos de arrendamiento financiero y adquirir los bienes que sean objeto de tales contratos.

La realización de las operaciones señaladas en esta fracción, así como el ejercicio de los derechos o el cumplimiento de las obligaciones de las partes, se sujetarán a lo previsto por esta Ley y, en lo que no se oponga a ella, por la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; y

XXV. Las análogas y conexas que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria.

En esa tesitura, siendo un servicio financiero el prestado por las arrendadoras financieras, es patente que de acuerdo con la mencionada fracción X del artículo 73 de la Constitución General de la República, corresponde al Congreso de la Unión el legislar respecto de la regulación de la actividad de tales empresas.

Es corolario de lo anterior, que la expedición y aprobación de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, en particular de lo establecido por su artículo 33 en cuanto al contrato de arrendamiento financiero, por parte del Congreso de la Unión, resulta acorde con la facultad que en favor de este cuerpo legislativo consagra el artículo 73, fracción X, de

la Constitución Federal, por lo que no se actualiza la hipótesis del artículo 124 del mismo Pacto Fundamental, que dispone que las facultades que no están expresamente concedidas a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados, es decir, que no se actualiza la competencia de los Congresos Locales para legislar en materia de arrendamiento financiero, no existiendo, por ende, violación a ese artículo 124.

No está por demás destacar que del capítulo de conceptos de violación de la respectiva demanda de garantías, se aprecia que el quejoso alega violación al artículo 133 constitucional, pero que la hace depender no de la expedición del artículo 33 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, sino por vía de consecuencia, de su aplicación, en tanto sostiene que siendo ese precepto violatorio de garantías, las autoridades jurisdiccionales responsables no lo debieron haber aplicado, por lo que no demostrada la inconstitucionalidad de tal dispositivo legal, entonces, el planteamiento aludido resulta ineficaz.

Huelga señalar que de acuerdo con lo expuesto, si bien el quejoso expresó determinados conceptos de violación en su demanda de garantías, por lo que no es posible convenir con el Ministerio Público Federal de la adscripción en cuanto a que se modifique la sentencia y se decrete el sobreseimiento ante la ausencia de conceptos, lo cierto es que los agravios expuestos en esta revisión resultan infundados y, por tanto, lo procedente es confirmar la sentencia sujeta a revisión.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:



PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Benjamín Francisco Villaescusa Molina, en términos del resolutivo primero del fallo impugnado.

TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Benjamín Francisco Villaescusa Molina, en términos del resolutivo segundo de la sentencia recurrida.

NOTIFÍQUESE; y cúmplase.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de diez votos de los señores Ministros: Aguirre Anguiano, Azuela Güitrón, Castro y Castro, Díaz Romero, Gudiño Pelayo, Ortiz Mayagoitia, Román Palacios, Sánchez Cordero, Silva Meza y Presidente Góngora Pimentel. No asistió el señor Ministro José Vicente Aguinaco Alemán, por licencia concedida.

Firman el Presidente, el Ponente y el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

PRESIDENTE:

MINISTRO GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL

PONENTE:

MINISTRO JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS:

LIC. J. JAVIER AGUILAR DOMÍNGUEZ.

Esta hoja corresponde al amparo en revisión número 2528/99, promovido por Benjamín Francisco Villaescusa Molina. Fallado el dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve, en el sentido siguiente: **PRIMERO.** Se confirma la sentencia recurrida. **SEGUNDO.** Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Benjamín Francisco Villaescusa Molina, en términos del resolutive primero del fallo impugnado. **TERCERO.** La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Benjamín Francisco Villaescusa Molina, en términos del resolutive segundo de la sentencia recurrida. **Conste.**

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
PARA NOTIFICACION EL 05 NOV. 1999

08 NOV. 1999
notificó la resolución anterior a los interesados. Conste

SIENDO LAS CATORCE HORAS DE LA FECHA ANTES INDICADA,
Y EN VIRTUD DE NO HABER COMPARECIDO LOS INTERESADOS
A OIR NOTIFICACIONES SE TIENE POR HECHA DICHA NOTIFICACIÓN.
POR MEDIO DE LISTA, DOY FE